Consideraciones sobre el impacto transversal del narcotráfico

Gina Enrico¹

Resumen

El trabajo aborda el delito de narcotráfico desde diversos enfoques, explorando su relación con el crimen organizado y el lavado de activos, así como sus impactos sociales, económicos y ambientales. Se analizan las consecuencias más evidentes que genera el narcotráfico, pero también aquellas menos visibles, como el daño al medio ambiente y a la biodiversidad, a través de prácticas como la deforestación y la contaminación.

Sumario

1.- Introducción | 2.- El crimen organizado | 3.- El narcotráfico como delito precedente del lavado de activos | 4.- Los delitos ambientales asociados al narcotráfico | 5.- Conclusión | 6.- Bibliografía

Palabras clave

lavado de activos – narcotráfico – delitos ambientales – deforestación – contaminación ambiental

¹ Estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires; funcionaria judicial en el Fuero Penal Económico. Mail: enricogina4@gmail.com

1. Introducción

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo explorar el delito de narcotráfico desde múltiples enfoques, examinando sus características como parte del crimen organizado, su relación con el lavado de activos y sus consecuencias más evidentes como aquellas menos visibles que se derivan de estas actividades ilícitas.

El narcotráfico representa una verdadera amenaza con profundas implicancias sociales, económicas y políticas; ha ido evolucionando en su complejidad y alcance, consolidándose como una de las principales actividades delictivas a nivel mundial, siempre en la búsqueda de lograr mayores ingresos, en tanto su meta final es de tinte económico.

En este orden de ideas, el lavado de activos resulta un proceso clave en el funcionamiento del narcotráfico, permitiendo a las organizaciones criminales integrar a la economía formal de un Estado las ganancias obtenidas de dicha actividad, evitando la trazabilidad de los fondos de origen ilícito con el fin de poder posteriormente gozar de los mismos.

Por otro lado, es imperioso señalar que, así como trae aparejado consecuencias en la economía de un Estado -en tanto la práctica del lavado de dinero que deviene del narcotráfico es sumamente nociva-, también genera otro tipo de problemáticas. Concretamente, me refiero a la interrelación entre el narcotráfico y su impacto en el ambiente y en la biodiversidad.

En este contexto, el daño ambiental que se genera como consecuencia del delito de narcotráfico muchas veces es pasado por alto, quedando en la periferia de los intereses públicos. A pesar de ello, en este trabajo intentaré exponer las consecuencias que trae el cultivo ilícito de ciertas drogas; desde la deforestación, la contaminación ambiental, hasta el desplazamiento humano.

En definitiva, el trabajo tiene como finalidad realizar un enfoque integral de los conceptos fundamentales en torno al narcotráfico, así como también sus aspectos más críticos, sin dejar de mencionar que por la complejidad y envergadura del tema, y por la extensión impuesta para su redacción, se trata de una introducción al mismo, pero procurando ser lo más abarcativo posible de aquellas cuestiones esenciales.

2. El crimen organizado

Para dar comienzo al desarrollo del trabajo, me gustaría introducir brevemente la “*cuestión criminal*” de la que habla Luigi Ferrajoli (2006). El autor señala que la criminalidad organizada se ha convertido en la nueva amenaza, desplazando a la criminalidad individual por sujetos marginados, advirtiendo que la primera ha adquirido un carácter transnacional y una influencia económica tal que lo transforma en uno de los negocios más lucrativos del mundo.

Ahora bien, el crimen organizado se caracteriza por las prácticas ilícitas llevadas a cabo en un periodo sostenido en el tiempo, capaz de encubrir sus crímenes de una manera relativamente efectiva, en el que intervienen tres o más personas. Poseen formas de disciplinamiento dentro de la organización, y operan muchas veces con violencia e intimidación. Se trata de una estructura compleja, nutrida en muchas ocasiones de profesionales, con distribución de tareas. Lo que lo caracteriza es su

transnacionalidad: este tipo de organizaciones delictivas no reconocen Estados, los hechos se pueden producir en uno y los beneficios económicos en otro. Es importante destacar que su objetivo es la rentabilidad del negocio ilícito, siendo su fin último el económico.

La delincuencia organizada transnacional abarca múltiples delitos, tales como el tráfico de drogas, el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, el tráfico de armas de fuego, entre otros.

Al respecto, la Convención de Palermo define al “grupo delictivo organizado” como “un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material” (Naciones Unidas, 2000, art. 2.a).

Dicha definición es criticada por autores como Zaffaroni (2008), por entender que la citada convención contiene casi toda forma de actividad ilícita no individual que tenga un fin económico, basada en una criminalidad de mercado. Además, cuestiona el término “crimen organizado” por considerarlo un concepto de origen periodístico que carece de una definición criminológica adecuada.

Otra mirada es la que realiza Carolina Sampó (s.f.), quien considera que la definición excluye dos aspectos fundamentales: la violencia y la corrupción; en tanto las organizaciones delictivas buscan relacionarse con funcionarios del Estado para poder corromperlos. En efecto, el narcotráfico genera un círculo vicioso de violencia y corrupción.

a. El narcotráfico como forma de crimen organizado

Las organizaciones criminales que se dedican al narcotráfico tienen como principal objetivo generar ganancias económicas, siendo una de las formas de crimen organizado más visible y que más ingresos provoca. Ejemplo de ello es lo expuesto por la BBC, en donde afirma, tomando como referencia un informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito² y del Foro Económico Mundial, que el narcotráfico se ha posicionado en el top ranking de las actividades ilícitas más lucrativas. No es novedad que el tráfico ilícito de drogas genera grandes ganancias desde hace décadas, por ejemplo, según un informe de la UNODC (2011, p. 7), los ingresos para el año 2009 fueron de USD 870.000 millones.

El tráfico ilícito de drogas constituye un proceso delictivo de múltiples etapas, entre ellas, el cultivo, la producción, la distribución y comercialización de las sustancias, y que posteriormente continúa con el lavado del dinero. La narco criminalidad facilita en reiteradas ocasiones la proliferación de otros delitos, como la asociación ilícita, el tráfico de armas de fuego, la comercialización de precursores químicos, la extorsión, la trata de personas y la corrupción; así como también posee variadas consecuencias. Aun cuando el bien jurídico tutelado es la salud pública, las primeras afectaciones se dan contra el ambiente y la biodiversidad (punto que será desarrollado más adelante). Como consecuencia de ello, se lo engloba como un delito complejo.

² En adelante, UNODC.

A título ilustrativo, cabe destacar que gran parte de la producción, tráfico y comercialización de las sustancias ilícitas tienen su origen en Latinoamérica: Colombia, Perú y Bolivia son los mayores productores de cocaína conforme lo estipulado en los informes mundiales sobre las drogas de la ONU; Paraguay es uno de los mayores productores de marihuana de la región; mientras que Brasil y Chile constituyen grandes rutas de tránsito para el tráfico de droga.

Con toda claridad se desprende que este delito posee una mayor complejidad por cuanto se adapta a las nuevas formas de mercado, logrando evadir la persecución penal y desconociendo cualquier tipo de frontera cultural y geográfica. A pesar de que constituye una amenaza a nivel mundial, tiene mayor impacto a nivel regional, debido a que las actividades de cultivo se concentran en regiones específicas por razones estratégicas de seguridad y de ambiente, y porque muchas veces requiere de la corrupción de funcionarios para lograr su funcionamiento, infiltrándose en las instituciones gubernamentales y debilitando así la capacidad del Estado para combatirlo de forma eficiente.

Ante esta última consideración, deviene útil mencionar el “Proyecto contra las Drogas Sintéticas y el Desvío de Precursores Químicos en Argentina” impulsado por la UNODC (s.f.), desarrollada junto a la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y el Ministerio de Seguridad de la Nación, que plantea como uno de sus desafíos combatir el círculo vicioso que se da entre el narcotráfico y la corrupción, y que busca fortalecer las capacidades de las instituciones argentinas para potenciar -entre otras cuestiones- una respuesta de la justicia penal frente a esta problemática.

3. El narcotráfico como delito precedente del lavado de activos

Como se hizo mención anteriormente, las ganancias producto del narcotráfico son destinadas en parte para financiar el mantenimiento y expansión de su negocio; mientras que el resto son circulados en esquemas de lavado de dinero con el objetivo final de poder dar apariencia lícita a los mismos y con ello disfrutar de los beneficios dentro de la economía formal de un país. Por lo tanto, es crucial tener en consideración el aspecto económico en este tipo de delitos. Logran obtener beneficios y rendimientos financieros, y a su vez alimentan el circuito para corromper las estructuras de la administración pública y el orden económico y financiero.

Me gustaría detenerme brevemente en la figura del lavado de dinero y qué se entiende por la misma. También denominado lavado de activos o blanqueo de capitales, refiere a la conversión de activos que poseen un origen ilícito fruto de una actividad delictiva, en activos de “apariencia legal” a través de diversos mecanismos y operaciones complejas para incorporarlos al sistema económico y financiero de un Estado. Es decir que busca introducir de manera disimulada, bienes de origen ilícito a una economía formal.

Se desprende que, como consecuencia de los esfuerzos llevados a cabo por los Estados en la persecución de los narco criminales, surge la necesidad de rastrear la trazabilidad del dinero para observar el origen de estos.

Ahora bien, ¿de dónde surge la necesidad de la comunidad internacional por introducir esta figura en las legislaciones internas de cada Estado? Fernando Córdoba

(2019) señala que se apunta al decomiso de los bienes que son producto de la actividad delictiva, como medio más eficaz para prevenir y reprimir la criminalidad organizada; con la finalidad de aislar económicamente al autor para que no pueda sacar provecho de los mismos y por ende privar a estas organizaciones de las herramientas económicas para seguir operando (pp. 19-21).

Es imperioso mencionar en este apartado la labor del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), creado con motivo de la cumbre G-7 en 1989. El citado organismo nació con la finalidad de luchar contra el lavado de activos y define dicha figura como el “proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales ... El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero” (GAFILAT, s.f., párr. 1).

Las etapas que componen el lavado de activos pueden ser resumidas en: i) Colocación de los bienes o dinero en efectivo: implica el traslado de grandes cantidades de dinero provenientes de actividades ilícitas. Dicho dinero debe ser colocado en el sistema económico formal, constituyendo el paso más difícil. Se requiere de una estrategia para que mediante técnicas de reciclaje pasen a tener apariencia lícita. ii) Fraccionamiento o decantación: inmersión de los fondos o bienes en la economía legal seguida de sucesivas operaciones para su ocultamiento, inversión o transformación; a través de transacciones financieras y comerciales de distintos niveles de complejidad. Una de las finalidades es complicar la tarea de las autoridades de rastrear el origen de los fondos, intentando mezclar los fondos ilícitos con los lícitos, con lo cual la trazabilidad del dinero se torna más impermeable. iii) Inversión, integración o goce de los capitales ilícitos: se incorpora el dinero a la actividad legal. El dinero negro se empieza a mezclar con la actividad normal del negocio que se elija para simularlos como lícitos. Se deben tornar legítimos al momento de integrarlos.

Por ejemplo, en una causa judicial (2016) se condenó a los imputados en orden a los delitos de “asociación ilícita en carácter de miembros, en concurso real con el de lavado de dinero procedente del narcotráfico”, en el que se logró acreditar que los mencionados integraban una asociación ilícita que se dedicaba a lavar dinero proveniente del narcotráfico internacional. Dicho dinero era girado a la Argentina a través de cuentas bancarias. Luego, era retirado “...en efectivo, cheques o por intermedio de otras transferencias, distribuyéndolos entre los demás integrantes de la asociación ilícita, para la constitución y compra de sociedades, inmuebles, maquinaria agrícola y rodados, como así también, para el desarrollo de la actividad agropecuaria, siempre bajo la apariencia de operaciones realizadas legalmente...”³.

a. Normativa internacional

En lo que respecta al GAFI, el organismo ha tenido una gran influencia en la legislación interna de diversos Estados y en este sentido ha dictado recomendaciones (las últimas fueron dictadas en el 2012), conocidas como los “Estándares Internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del

³ (Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6, causa CFP 14032/1999/TO1, 2016, p. 13)

terrorismo y la proliferación” (2023). En total, son 40 recomendaciones que apuntan a la protección del sistema financiero.

Dentro de las recomendaciones, el GAFI establece que los países deben tipificar el delito de lavado de activos conforme a lo establecido en la Convención las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988 y en la Convención de Palermo de 2000. Si bien la Convención de 1988 no utiliza el término “lavado de activos”, sí establece que los Estados parte deben realizar las medidas necesarias con el fin de identificar y confiscar las ganancias del tráfico de drogas. Asimismo, entre las herramientas que agrega para combatir el lavado de activos se encuentran el decomiso de bienes generados por la actividad ilícita, así como la asistencia judicial recíproca en la materia.

Con respecto a la Convención de Palermo -incorporada a nuestra legislación interna mediante ley 25.632-, la misma innovó en cuanto a los delitos asociados al crimen organizado. La Convención del ‘88 se centraba en el tráfico ilícito de drogas, mientras que la del 2000 amplió la rama de opciones en cuanto a los “delitos graves” y otras modalidades, como el blanqueo (art. 6), corrupción (art. 8), etc. La Convención de Palermo reviste de especial importancia ya que introduce el término “blanqueo”. Desde esta óptica, en su art. 6.2 a) se señala que el primer párrafo del mismo se aplicará “a la gama más amplia posible de delitos determinantes”. Finalmente, en su art. 7 refiere a las medidas para combatir el blanqueo de dinero, dentro de las cuales invita a los Estados a establecer unidades de información financiera.

b. Evolución legislativa: un breve repaso

Corresponde mencionar brevemente la evolución que sufrió la figura del lavado en nuestro ordenamiento interno, para comprender mejor los bienes jurídicos tutelados. Anteriormente, solo se encontraba previsto para el tráfico de estupefacientes, en base a los delitos previstos en la ley 23.737, por lo cual se lo asociaba al bien jurídico salud pública. Esta limitación implicaba que conductas de lavado originadas en otros delitos quedaban fuera del alcance penal.

Luego, con el art. 278 del Código Penal, se buscó ampliar la gama de delitos precedentes, pero no se constituía como una figura autónoma, sino como un agravante del encubrimiento. Esta regulación tampoco era satisfactoria, toda vez que la punición iba dirigida a quien no formare parte del delito previo, es decir al tercero que brindaba ayuda a otro a lavar el dinero. Esta regulación comenzó a recibir objeciones del GAFI, y, en consecuencia, fue nuevamente modificado.

Así, surge el art. 303 del C.P., que establece que será reprimido con penas de prisión de 3 a 10 años y multa el que:

«[...] convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, adquiriere, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes u otros activos provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito».

De esta forma, se introduce una gran variedad de verbos típicos, y se configura como un delito autónomo. Además, con esta reforma, ya no se exige una condena firme respecto del delito precedente. Y, por otro lado, uno de los beneficios que añade

es la autonomía del delito de lavado, ya no restringe al autor que haya tenido que participar del anterior delito, sino que ahora el autor pudo no haber formado parte. Por lo tanto, no se requiere que haya una condena firme por narcotráfico para que se investigue el lavado de dinero -aunque es indiscutible que una condena por el delito previo es la mejor forma para poder probar que los activos tienen origen ilícito-.

Hoy es denominado un delito pluriofensivo, ya que afecta a varios bienes jurídicos al mismo tiempo. Los bienes que se tratan de proteger son diversos, principalmente se trata del sistema económico y financiero, pero también del bien jurídico del ilícito precedente. Se debe señalar que la finalidad del lavado de dinero no es en sí lograr una ganancia como sucede con el delito precedente -como el narcotráfico-, sino darle la apariencia “legal” dentro del sistema económico.

4. Los delitos ambientales asociados al narcotráfico

El crimen organizado comete distintas acciones delictivas, entre ellas, los delitos ambientales; ya sea como delitos autónomos o formando parte de la cadena del crimen organizado, donde se pone en juego la esfera pública.

Considero fundamental abordar este aspecto del narcotráfico, es decir todas aquellas consecuencias que emergen de dicha actividad, y que generalmente no llegan a tener la visibilidad ni repercusión esperable. Se suele centrar en las consecuencias económicas y de seguridad que trae aparejado este delito, pero no así las relacionadas con el medio ambiente.

Las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y sustancias ilícitas contribuyen al cambio climático, en virtud de las prácticas que llevan a cabo: cultivo, producción y transporte de los narcóticos; actividades nocivas como la deforestación; y la contaminación del aire, suelos y aguas.

La presencia del crimen organizado vinculado al narcotráfico en distintas zonas de Latinoamérica no es un fenómeno reciente, sin embargo, ha comenzado a enfatizarse en los recursos naturales afectados; ya que la zona alberga el 40% de la biodiversidad mundial según lo establecido en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2010). Las zonas geográficas más utilizadas son el corredor mesoamericano y el Amazonas, lo que representa una de las grandes reservas de biosfera en Latinoamérica.

Por otra parte, estas actividades no sólo generan contaminación y distintas consecuencias en el ambiente debido a las prácticas de cultivos ilícitos propias del narcotráfico, sino que, además, a raíz de ello se comienzan a descubrir otros negocios ilegales que son altamente rentables. En este sentido, según un informe llevado a cabo por INTERPOL (2018, p. 15), se estima que los delitos ambientales generaron beneficios de USD 110.000 y 281.000 millones por año. De esta forma hay un creciente interés por los beneficios y las ganancias que se pueden obtener a partir de estas prácticas ilegales. A modo ilustrativo, corresponde mencionar el Informe Mundial sobre las Drogas 2023 de la UNODC (2023), en donde se destaca cómo los grupos de narcotraficantes no solo talan los bosques tropicales del Amazonas, sino que además trafican la madera para fines ilícitos. Todo ello solo genera una diversificación de delitos, siendo difíciles de detectar y complejizando la situación.

a. Las cifras en términos reales

Nótese que la preocupación de la comunidad internacional por este aspecto es reciente, a modo ilustrativo, corresponde nombrar el informe Mundial sobre las Drogas del 2022 de la UNODC (2022), donde, de forma novedosa, se exploran las implicancias ambientales asociadas al fenómeno de las drogas. En este sentido, resulta pertinente señalar algunas de las conclusiones a las que ha llegado el informe, con el fin de visibilizar aquellos aspectos que, en muchas ocasiones, no reciben suficiente atención por parte de los medios de comunicación. Por ejemplo, la ubicación de las actividades de cultivo y producción suele tener lugar en zonas remotas y poco pobladas, alejadas de la presencia del gobierno, muchas de las cuales pueden estar en áreas de reserva ecológica y parques naturales. El cultivo ilícito de arbusto de coca en Bolivia, Colombia y el Perú se ha asociado a la deforestación, erosión y empobrecimiento del suelo, la contaminación del agua, la pérdida de biodiversidad y otros daños ambientales (p. 35). En ese orden de ideas, señala que en 2020 en Colombia casi la mitad del cultivo ilícito de arbustos de coca se efectuaron en zonas protegidas (p. 21).

A los fines de ejemplificar, y brindar un escenario más amplio de la problemática, menciono brevemente otros daños ambientales que señala el informe:

- La fabricación de drogas sintéticas genera desechos que son evacuados en bosques, ríos o en alcantarillas (cuyo impacto es mayor en países donde cuentan con sistemas de tratamiento de aguas residuales deficientes).
- La huella de carbono por kilogramo de cocaína fabricado es notablemente mayor que la de otros cultivos agrícolas lícitos, y viene determinada por el cultivo de arbusto de coca (60%), la extracción del alcaloide (24%) y la eliminación de desechos (14%). El valor estimado de las emisiones de carbono totales correspondientes a la fabricación de cocaína a nivel mundial asciende a 8,9 millones de toneladas de CO₂e por año, lo que equivale a las emisiones medias causadas por los desplazamientos anuales de más de 1,9 millones de automóviles de gasolina, o al consumo de más de 3.300 millones de litros de combustible diésel (p.15). Además, menciona que el cultivo ilegal de la coca en Colombia es la causa del 43% al 58% de la deforestación total de la región.
- El uso intensivo de fertilizantes y plaguicidas puede causar efectos contrarios a los deseados, y ciertos tipos de riegos pueden acelerar la salinización del suelo.
- Los impactos en las zonas de tránsito pueden incluso superar la deforestación causada por los cultivos ilícitos.
- La deforestación de los bosques impacta en las comunidades que dependen de estos para su supervivencia.

En este sentido, el informe señala que la presencia de las redes de narcotráfico repercute en la deforestación a través del control del territorio y el desarrollo de la infraestructura como la construcción de pistas de aterrizaje (lo que contribuye a la contaminación aérea por el uso de avionetas) o caminos por tierra para traficar la droga.

Sin embargo, la propia ONU (2022) afirma que las investigaciones sobre los nexos entre las drogas ilícitas y el medio ambiente siguen siendo escasas, y que la información suele surgir de estudios aislados en ciertas regiones o zonas, pero aún no se puede concluir sobre sus consecuencias exactas a nivel mundial (p. 23).

b. Los perjudicados en el proceso

La catástrofe no solo es ambiental. Las cuestiones ambientales dañan a las generaciones presentes y futuras, impidiendo el uso y goce de los recursos naturales.

Una de las víctimas menos visibilizadas son las comunidades indígenas y aldeas rurales, posiblemente por su aparente lejanía, quienes tienen la desventaja de coincidir en ocasiones con las zonas elegidas por el crimen organizado, siendo desplazados de sus territorios para poder deforestar la zona y explotarla, con lo cual, hay un desplazamiento humano y una pérdida de identidad de los pueblos. Dicho desplazamiento incluso puede ocurrir como consecuencia de los incendios forestales que provocan estas organizaciones para hacer uso del suelo, los cuales, cuando se salen de control, arrasaron con las comunidades cercanas.

La Declaración de Río establece que:

“Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados deberían reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible” (ONU, 1992, principio 22).

En nuestro ordenamiento se recepta el término de desarrollo sostenible en la Constitución Nacional, art. 41.

Adicionalmente, se habla de un gran desafío para América Latina en cuanto a la degradación ambiental, especialmente para los grupos vulnerables y en desventajas, siendo más propensos a contraer enfermedades por el daño ambiental, a la pérdida de medios para sustentarse como consecuencia de la degradación de ecosistemas y a sufrir eventos climáticos con implicancias desastrosas (CEPAL, 2012, p. 245).

Se puede llegar a la conclusión de que el narcotráfico genera un círculo vicioso entre violencia y corrupción. Las migraciones forzadas por violencia derivada del narcotráfico son parte de este complejo entramado. Sin embargo, todas estas consecuencias son consideradas como una especie de “daño colateral”.

Finalmente, tenemos aquellos individuos que son utilizados como simples medios para lograr los fines de los narco criminales, como las mulas. Ferrajoli resalta que la pequeña delincuencia es promovida por las organizaciones criminales que se aprovechan de las necesidades económicas de los grupos más vulnerables.

En definitiva, el narcotráfico no solo impacta en el medio ambiente de forma negativa, sino que intensifica las desigualdades sociales y económicas de ciertas poblaciones y se aprovecha de los más débiles.

c. La proporcionalidad de las penas

Menciono brevemente el análisis que realiza Gloria Lai (2012) respecto de los criterios de proporcionalidad desarrollados para los delitos de contrabando de estupefacientes. La problemática surge con la ley de estupefacientes, en cuanto a la forma de castigar el tráfico de drogas. Tal como se mencionó anteriormente, ocurre que, en la mayoría de los casos, los que llegan a ser imputados son aquellos de los niveles más bajos dentro de la cadena del narcotráfico, es decir, los más vulnerables -

como las personas en contextos socioeconómicos pobres-. En cambio, los traficantes de más alto nivel no suelen aparecer en las causas penales.

En este sentido, Lai realiza una crítica a las penas establecidas, toda vez que nuestras leyes “no distinguen entre el tráfico de pequeñas cantidades de drogas (‘microtráfico’) y el tráfico a gran escala” (Lai, 2012, p. 5).

Una gran ejemplificación de lo mencionado fue el análisis de las sentencias dictadas por el Departamento Judicial Federal de San Martín, provincia de Buenos Aires, entre los años 2009 a 2012 en causas referidas a la ley 23.737. De dicho estudio surgieron los siguientes datos: hubo 512 personas imputadas, de las cuales 398 resultaron culpables. De ellas, el 37% fue por narcomenudeo, 36% por comercialización y posesión, mientras que solo el 4% por producción y fabricación. Concluyó además que la Argentina se ha vuelto un país de fabricación ilícita de drogas, especialmente de la cocaína, así como también se ha convertido en un destino para el lavado de dinero fruto del narcotráfico. Asimismo, surge que la Argentina, para el año de dicho informe, solo había sancionado penalmente el lavado de activos que deviene del narcotráfico en dos causas (Gorgal y Perkins, 2014, pp. 3, 5).

5. Conclusión

Se estableció como propósito de este trabajo de investigación visibilizar la problemática del narcotráfico de la forma más clara posible, especialmente en cuanto a cómo constituye un entramado de consecuencias diversas que exceden la afectación a la seguridad de un estado y a la salud pública. Para ello, se procuró introducir algunos conceptos fundamentales en torno al narcotráfico y al crimen organizado, para comprender la mecánica de dicha actividad delictiva.

Un enfoque de investigación más amplio en las causas por narcotráfico resulta vital. En este sentido, las políticas no deberían orientarse únicamente a la detención de los miembros de las organizaciones –frecuentemente limitados a aquellos que se encuentran en los eslabones más bajos y fácilmente reemplazables- y en el desmantelamiento de la mecánica de lavado que utilicen; sino además en la indagación de las consecuencias menos visibles.

Se tiende a pensar que las distintas restricciones normativas que van surgiendo conducen a una disminución del tráfico de drogas, sin embargo, ocurre una diversificación de modalidades y una ramificación de rutas alternativas. Por ello es tan importante un enfoque multidisciplinario. Al respecto, Zaffaroni menciona que las leyes penales -en especial aquellas dirigidas al crimen organizado- nunca eliminan los fenómenos, sino más bien, logran dificultar los servicios y la circulación que ofrece esta criminalidad, con lo cual se lograría, según él, la eliminación de las organizaciones más débiles, pero fortaleciendo las más poderosas; cayendo así en un círculo vicioso.

Como se ha señalado en este trabajo, los informes de los organismos internacionales sobre los impactos ambientales que se generan por el narcotráfico son recientes, pero generan consecuencias graves: desde el daño y desabastecimiento de los recursos naturales al desplazamiento de comunidades indígenas y rurales. Frente a ello, se debe elaborar una política criminal que aplique técnicas novedosas para evitar la impunidad de estos múltiples delitos.

En este sentido, las selvas y bosques constituyen ecosistemas estratégicos cuya protección es prioritaria, siendo fundamental la implementación de políticas públicas para lograr su reforestación y conservación. Si a esto se le suma el hecho de que en América Latina los recursos para combatir estos delitos son insuficientes por la compleja geografía que nos rodea, se vuelve un negocio ideal y sumamente rentable para aquellos que cometen esta actividad delictiva.

A su vez, sumado a las problemáticas propias del narcotráfico, se agregan las que surgen del lavado de activos, con sus propias consecuencias. Este último no solo favorece la expansión del tráfico ilícito de drogas y de otros delitos del crimen organizado; sino además impacta en la economía formal de un país, en tanto genera una distorsión de precios e inversiones y promueve una competencia desleal.

Se puede concluir, por lo tanto, que el narcotráfico representa un desafío multidimensional, por lo que resulta fundamental abordarlo desde un análisis integral, donde se tengan en cuenta las múltiples aristas que lo configuran.

6. Referencias bibliográficas

- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2012). *La sostenibilidad del desarrollo a 20 años de la cumbre para la tierra: avances, brechas y lineamientos estratégicos para América Latina y el Caribe*. <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/e1f6be1d-0b2c-4710-bcbe-3bb2000f079e/content>
- Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Artículo 2.a. 15 de noviembre de 2000. <https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf>
- Córdoba, F. (2019). *Delito de lavado de dinero* (4ª reimpresión). Editorial Hammurabi.
- GAFI. (2023). *Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva*. <https://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/gafilat/documentos-de-interes-17/publicaciones-web/4692-recomendaciones-metodologia-actdic2023/file>
- Ferrajoli, L. (2006). *Criminalidad y Globalización*. *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, 39(115), pp. 301-316.
- GAFILAT. (s.f.) *Glosario de definiciones*. <https://www.gafilat.org/index.php/es/glosario-de-definiciones>
- Gorgal, D. P., Perkins, M. (2014) *Será justicia ¿A quiénes condena la justicia argentina por narcotráfico?* Un análisis del Departamento Judicial Federal de San Martín, 2009-2012. https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=7e515e7e-8c53-9aa1-f4b7-c13fd14b02f4&groupId=252038
- Justo, M. (2016). Las cinco actividades del crimen organizado que recaudan más dinero en el mundo. *BBC News Mundo*. https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160316_economia_crimen_organizado_mj

- Lai, G. (2012, junio). *Drogas, crimen y castigo: proporcionalidad de las penas por delitos de drogas*. IDPC.
- Nellemann, C.; Henriksen, R., Pravettoni, R., Stewart, D., Kotsoy, M., Schlingemann, Shaw, M. and Reitano, T. (Eds). 2018. *World atlas of illicit flows*. A RHIPTO-INTERPOL-GI Assessment. RHIPTO -Norwegian Center for Global Analyses, INTERPOL and the Global Initiative Against Transnational Organized crime.
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2022). *Informe mundial sobre las drogas 2022: Las drogas y el medio ambiente*. https://www.unodc.org/res/wdr2022/MS/WDR22_Booklet_5_spanish.pdf
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2023). *Informe mundial sobre las drogas 2023*. https://www.unodc.org/res/WDR-2023/WDR23_ExSum_Spanish.pdf
- Organización de las Naciones Unidas (ONU). (1992). Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2010). *América Latina y el Caribe: Una superpotencia de biodiversidad*. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/Latin-America-and-the-Caribbean---A-Biodiversity-Superpower--Policy_Brief_SPANISH.pdf
- Sampó, C. (s.f.). *Una primera aproximación al Crimen Organizado en América Latina: definición, manifestaciones y algunas consecuencias*. Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de la Plata. <https://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2017/06/dptosegydef-bo18-artsampo.pdf>
- Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6. Causa CFP 14032/1999/TO1. 29 de Agosto de 2016.
- United Nations Office on Drugs and Crime (2011). *Estimating Illicit Financial Flow resulting from Drug Trafficking and other Transnational Organized Crimes*. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Illicit_financial_flows_2011_web.pdf
- United Nations Office on Drugs and Crime. (s.f.). *Proyecto contra las drogas sintéticas y el desvío de precursores químicos en Argentina*. <https://www.unodc.org/rocol/es/programasglobales/proyecto-de-control-de-sustancias-quimicas--interdiccin-de-drogas-ilcitas-y-respuesta-de-la-justicia-penal-al-narcotrffico-y-la-corrupcin-asociada-inl.html>
- Zaffaroni, E. R. (2008). *Globalización y crimen organizado*. Conferencia Mundial de Derecho Penal. Asociación Internacional de Derecho Penal. <https://www.penal.org/sites/default/files/files/Guadalajara-Zaffaroni.pdf>